



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Análisis de la ejecución por pago directo y extrajudicial en la Ley de Garantías Mobiliarias en Colombia y Costa Rica.¹

Leydi Johanna Quiroga Sánchez²

Universidad Católica de Colombia.

Resumen.

El concepto de “Garantía Mobiliaria” se ha ampliado a diversos bienes y derechos patrimoniales con el fin de garantizar el pago de una obligación, así entonces hoy se contemplan como Garantías Mobiliarias a todos los bienes que sean susceptibles de valoración pecuniaria, con lo que se busca que sea más fácil y efectivo el acceso al crédito, ya que habrá más posibilidades de presentar una garantía ante una entidad de crédito. La ejecución de dicha garantía constituye un derecho del acreedor. Este artículo pretende entregarle al lector un análisis de la figura desde su desarrollo legal y doctrinal en torno a las leyes de Garantías Mobiliarias. Para lo cual, se acudirá al estudio comparado entre el sistema jurídico colombiano y el costarricense a fin de ofrecer en mayor detalle, desde ambas perspectivas como dicha figura ha sufrido transformaciones enfocándose de manera específica en las modalidades de ejecución por pago directo.

Palabras Clave: Garantías Mobiliarias, Bienes, Derecho Civil, Registro, Derechos Patrimoniales, Comercio, Pago Directo, Economía.

¹ Artículo de reflexión presentado para optar al título de abogada bajo la Dirección del Dr. Eddy Ramírez, Docente investigador de la Universidad Católica de Colombia.

² ²Quiroga Sánchez Leydi Johanna. Egresada de la Facultad de Derecho Universidad Católica de Colombia. Sede Bogotá D.C.: 2018.
E-mail: johanitaquia-999@hotmail.com

Abstract

The concept of Movable Guarantees has been extended to various assets and property rights in order to guarantee the payment of an obligation, so then today are considered as security interests to all assets that are subject to pecuniary valuation, thus It seeks to make access to credit easier and more effective, since there will be more possibilities to present a guarantee to a credit institution. The execution of said guarantee constitutes a right of the creditor. This article aims to provide the reader with an analysis of the figure from its legal and doctrinal development regarding security interests. For which, we will go to the comparative study between the Colombian and Costa Rican legal system in order to offer in greater detail, from both perspectives how this figure has undergone transformations focusing specifically on the modalities of execution by direct payment.

Key Words:

Movable Guarantees, Assets, Civil Law, Registration, Patrimonial Rights, Commerce

Sumario:

Introducción. 1. Nociones Previas sobre Garantías Mobiliarias. 1.1. Garantías reales y personales. 1.2. Visiones sobre Garantías Mobiliarias en el Derecho internacional. 2. Regulación de las Garantías Mobiliarias en Colombia. 2.1. Ejecución de Garantías Mobiliarias en Colombia. 3. Pago directo en la ejecución de Garantías Mobiliarias entre Colombia y Costa Rica. 3.1. Mecanismo de pago directo. 4. Pago directo en la ejecución de Garantías Mobiliarias en Costa Rica. Conclusiones y Referencias.

Introducción.

El desarrollo de acuerdos comerciales en el mundo ha incentivado a los países a fortalecer su producción interna mediante el apoyo a la industria a gran escala y también a las pequeñas y medianas empresas en las cuales se observa un potencial de proyectos productivos exitosos. Es así como surgen necesidades de implementar mecanismos que favorezcan el acceso a líneas de crédito a pequeñas y medianas empresas.

De esta manera se configura el desarrollo del concepto de Garantías Mobiliarias, que de modo general se refiere a bienes muebles que garantizan obligaciones crediticias, esta figura se desarrolla a consecuencia de la necesidad de aumentar las oportunidades de crédito y financiación para sectores productivos a pequeña escala, esto en favor del crecimiento y sostenibilidad de los empresarios.

Es tal la importancia de esta figura que se han creado modelos de ley sobre Garantías Mobiliarias por entidades de derecho internacional con el fin de apoyar y masificar su implementación en varios países, un ejemplo de esto es la “Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias” de la Organización de Estados Americanos (OEA), junto con la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) que expidió en el año 2016 su propia ley modelo sobre el tema.

Ahora bien, el presente artículo de investigación esboza un panorama general de los sistemas de Garantías Mobiliarias en Colombia y Costa Rica realizando un análisis a profundidad de la figura ejecución por pago directo en las leyes de Colombia y la ejecución extrajudicial de Garantías en Costa Rica.

En Colombia considerando que con la expedición de la Ley 1676 de 2013 se modificó el régimen de Garantías Mobiliarias, donde se ha ampliado el régimen de garantías de crédito a bienes muebles que sean susceptibles de valoración pecuniaria, con la finalidad de ampliar el acceso a créditos bancarios para pequeñas y medianas empresas que no cuenten con grandes capitales (Superintendencia de Industria y Comercio, 2011).

A su vez Costa Rica ha creado un sistema de Garantías Mobiliarias basado en el modelo propuesto por la Organización de Estados Americanos, que se materializó con la expedición

de la Ley 9246 de 2015 que incentiva la posibilidad de acceso a créditos a las pequeñas y medianas empresas mediante la constitución de garantías mobiliarias, con el fin de promover la modernización y la competitividad de la estructura productiva del país, logrando un crecimiento y desarrollando de esta manera importantes avances en esta materia.

El análisis realizado desde la regulación propuesta en ordenamientos jurídicos diferentes, permite identificar diferentes criterios acerca de la implementación de un régimen de garantías, y los mecanismos que se deben implantar para el correcto funcionamiento de las mismas.

La metodología empleada en este caso específico de análisis es el desarrollo de un artículo de reflexión, que recurre a la hermenéutica para la reconstrucción normativa sobre el caso en los ordenamientos jurídicos de Colombia y Costa Rica, considerando como caso de estudio específico, las modalidades de ejecución por pago directo en Colombia y ejecución extrajudicial en Costa Rica.

1. Nociones Previas sobre Garantías Mobiliarias.

La institución de las Garantías Mobiliarias se remonta al derecho romano, donde una obligación podía ser garantizada de distintas maneras. Por un lado, se buscaba obligar a un tercero en favor del deudor de la obligación, si este llegaba a incumplir con lo pactado, y por otra parte, se podía entrar a garantizar la obligación con una cosa de la que fuera titular el deudor y la cual pasara a cabeza del acreedor en caso de incumplimiento. (Arangio Ruiz, Caramés Ferro, & Elguera, 1986).

Gabrielli y de Cores Helguera (2010) definen la garantía en sentido amplio, como la constitución de un vínculo entre una persona y una cosa que tiene la finalidad de asegurar el cumplimiento de una obligación de contenido patrimonial, así las cosas, se afectarían bienes determinados (muebles o inmuebles) entendiéndose como una garantía real y dejando en mejor situación al acreedor cuando se presenta un incumplimiento por parte del deudor.

Las garantías reales se usan de manera frecuente en el contexto mundial, por la seguridad que brindan frente a operación de crédito. Es así, que con el paso del tiempo se ha buscado ampliar los bienes que pueden presentarse como garantía real frente al acreedor de una obligación, surgiendo la necesidad de incorporar el concepto de Garantía Mobiliaria.

Frente al concepto de Garantía Mobiliaria debe tenerse en cuenta que la misma no tiene un concepto unívoco, sino por el contrario tiene diversas definiciones adoptadas de acuerdo al contexto que se tenga en cuanto al derecho civil interno de cada Estado. Sin embargo, para efectos del presente artículo y el análisis que se realiza sobre garantías inmobiliarias en el derecho comparado de Colombia y Costa Rica, se tomará la definición que expone Espinosa (2015):

Las garantías mobiliarias son todo gravamen impuesto sobre un bien mueble corporal o incorporeal, futuro o presente, derivado o atribuible y que cuyo valor sea determinado o determinable en dinero, y que con éste se asegure una obligación; la garantías mobiliarias después de la definición dispuesta en el artículo tercero de la ley 1676 de 2013 son un género con un amplísimo espectro de aplicación, teniendo en cuenta que por competencia residual y para los efectos de esta ley, un bien mueble es todo aquello que no sea inmueble, es todo aquello que sea cuantificable o este cuantificado en dinero, por lo que, se está hablando de cualquier “cosa” que asegure una obligación (p.70).

Ahora bien, dicho lo anterior es necesario realizar unas precisiones en cuanto a disposiciones generales sobre el régimen de garantías mobiliarias, de manera que posteriormente cuando se analicen casos particulares se pueda realizar un análisis comparativo por parte del lector.

1.1 Garantías reales y personales:

Tamayo (2004) define las garantías reales como las que se constituyen o afectan bienes determinados (muebles o inmuebles) para respaldar el crédito, el cual puede pertenecer al deudor mismo o a terceros, así mismo expresa que dichas garantías otorgan al acreedor el derecho de persecución sobre el bien, e igualmente, un privilegio o mejor derecho para el pago. Los ejemplos más comunes de garantías reales son la hipoteca y la prenda.

Respecto de las garantías personales Herrera (2011) las define como aquellas en las que el deudor además de ofrecer al acreedor la prenda general sobre su patrimonio, ofrece, además, como respaldo de la obligación, el patrimonio general de otras personas como el fiador o codeudor, así el crédito quedará respaldado con todos los bienes de propiedad del tercero que se compromete al pago, en caso que el deudor principal no cumpla.

1.2 Visiones sobre Garantías Mobiliarias en el Derecho internacional.

El derecho de las garantías es un ámbito del derecho privado que ha tenido mayor influencia de las políticas de globalización, en la medida que el intercambio comercial entre países es cada vez más frecuente por lo que se requiere que se unifiquen ciertos criterios en pro de favorecer las relaciones comerciales entre países (Torrealba, 2015).

Esto se reafirma con la expedición por parte de instituciones internacionales de leyes modelo para la constitución y ejecución de garantías mobiliarias como el caso de la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA) o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI- UNCITRAL).

Las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional relativas a las Garantías a Primer Requerimiento, implantan el procedimiento para una práctica uniforme de las mismas

a nivel mundial; y no se instituyen en Ley para todos los países, solo cuando los nacionales por voluntad expresa, consignan en los documentos vinculantes su utilización. “Bajo el nombre de garantía a primer requerimiento, también llamada a primer aviso, o por arrastre del inglés, a primera demanda”, significa aquel contrato de garantía personal por la que un tercero intercede ante el acreedor garantizando el cumplimiento de determinadas obligaciones de un deudor principal. Con la particularidad de que la obligación de pago del garante se vence por la sola reclamación de pago hecha por el acreedor, unida acaso a otros requisitos formales; sin que el garante pueda discutir la corrección material de esta reclamación desde la perspectiva del deudor principal, ni oponer al pago las excepciones que éste deudor pudiera oponer al acreedor en la relación de la Garantía.

Así mismo la Comisión de la Unión Europea ha presentado un Proyecto de Marco Común de Referencia (DCFR) sobre derecho contractual, el cual describe Olmos (2014) en su investigación sobre el tema, indicando que dicho marco contiene un capítulo dedicado de manera exclusiva al tema de garantías mobiliarias que regulan todos los aspectos relacionados con su constitución, oponibilidad a terceros, ejecución y extinción de la garantía. La finalidad de crear reglas comunes en esta materia es facilitar el acercamiento de los ordenamientos jurídicos mediante la introducción de terminología y regulación uniforme.

Como se puede observar, el tema de las Garantías Mobiliarias para respaldar obligaciones, es un factor común en los Estados y las comunidades internacionales, las cuales han centrado esfuerzos para que se amplíen. Esto en la medida en que un sistema de Garantías Mobiliarias unificado genere consecuencias positivas en los mercados y establezca políticas públicas para contribuir en la disminución de riesgos.

En definitiva, el sistema de garantías repara los fallos del mercado de la financiación, marcado por una importante asimetría informativa (riesgo moral, y selección adversa). Al reducirse el riesgo, se mejoran idealmente las condiciones de la financiación, ampliándose los plazos de concesión y/o reduciéndose el coste del crédito. No todo régimen de garantías permite alcanzar estos objetivos. Sólo un régimen de garantías sólido, fiable, efectivo y de fácil ejecución facilita el acceso al crédito y reduce el coste de la financiación (Feliú Rey, 2016, p.3).

Respecto de lo descrito anteriormente, es necesario ampliar los conceptos de riesgo moral y selección adversa, que han sido ampliamente desarrollados por Akerlof (1978) que indica que la asimetría de la información es una falla del mercado que genera riesgo o incertidumbre

y termina incidiendo sobre la decisión de los consumidores o clientes dando lugar a procesos de elección no óptimos.

El problema de selección adversa surge cuando una parte de la transacción posee información relevante desconocida por la otra, de forma que la primera realiza el proceso decisional y la transacción en superioridad de condiciones. El resultado en este tipo de situaciones es que productos de distinta calidad pueden ser vendidos al mismo precio debido a que el comprador no tiene la información suficiente para discriminar entre unos y otros (Gómez, 2008, p.9).

Ahora bien, frente al riesgo moral es preciso indicar que el mismo surge cuando se genera una relación entre las partes y surgen entre éstas comportamientos oportunistas debido a la asimetría de información entre las partes, se considera que existe un problema de riesgo moral cuando una de las partes de la transacción o relación comercial adopta acciones que afectan a la valoración que la otra parte ha hecho de la transacción (Requejo, 2001).

Como se puede observar el concepto de “Garantía Mobiliaria” se ha ampliado a diversos bienes y derechos patrimoniales con el fin de garantizar el pago de una obligación, así entonces hoy se contemplan como garantías mobiliarias a todos los bienes que sean susceptibles de valoración pecuniaria, con lo que se busca que haya mayor accesibilidad a créditos.

2. Regulación de las Garantías Mobiliarias en Colombia.

Colombia reguló la institución de las garantías mobiliarias mediante la expedición de la Ley 1676 de 2013, que surge como respuesta a la necesidad de facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso a canales de crédito que le permitan desarrollar su proyecto productivo de manera eficiente.

Cabe resaltar que los activos mobiliarios tangibles son los bienes corporales muebles con los que cuentan las pequeñas y medianas empresas que tenían una serie de restricciones en las instituciones financieras para que se constituyeran como garantías de crédito con anterioridad a la expedición de la Ley 1676 de 2013, como se evidencia en un estudio realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Las instituciones financieras aceptaban de manera general activos tangibles como vehículos y maquinaria, pero frente a otros se encuentra que el panorama no era muy favorable, por lo

que el marco legal para ciertos bienes muebles era restrictivo, lo que reflejaba un panorama difícil para el acceso de las pequeñas y medianas empresas a soluciones financieras, al no poder constituir como garantía bienes como equipos de cómputo, cultivos, semovientes, entre otros.

En ese sentido, el estudio realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio (2011) refleja que los activos mobiliarios aceptados como garantía por parte de instituciones financieras se concentraban en Maquinaria Industrial, Equipo y Maquinaria Agrícola y Vehículos Automotores.

Ahora bien, el escenario para la constitución de garantía mediante activos intangibles presentaba más dificultades, ya que las instituciones financieras no consideraban que este tipo de bienes fueran una garantía que respaldara la deuda del acreedor, por lo que el 90% de las entidades bancarias presentaban restricciones para la aceptación de Cultivos y Cosechas Agrícolas, Ganado y Pescado.

Es notoria la necesidad que enfrentaba el sector industrial y comercial en Colombia de evolucionar en la normativa referente a garantías mobiliarias, ya que de esto dependía que las pequeñas y medianas empresas tuvieran una mayor sostenibilidad mediante el acceso a líneas de financiación bancaria, es decir, que no existía funcionalidad y flexibilidad para la constitución de éstas. Otro factor importante es la dificultad en hacer efectiva la garantía en caso de incumplimiento; hecho que no se tenía contemplado en nuestro código de Comercio y es ésta la razón por la cual expide la Ley 1676 de 2013 sobre garantías mobiliarias en Colombia.

2.1 Ejecución de Garantías mobiliarias en Colombia:

La Ley 1676 de 2013 contempló varias formas de ejecutar las Garantías Mobiliarias, esto en gran medida para permitir al acreedor contar con métodos más eficaces para hacer efectiva la garantía en caso de incumplimiento del deudor.

Dicho lo anterior, se procederá a identificar los mecanismos de ejecución de garantías mobiliarias que dispone la legislación colombiana, que son el pago directo, la ejecución

especial, la ejecución judicial y en ciertos casos los Mecanismos Alternativos de solución de conflictos.

Es así como se prevé la ejecución por pago directo, la ejecución especial, la ejecución judicial o también las partes están facultadas para acudir a mecanismos alternativos de solución de conflictos.

El pago directo está previsto en el artículo 60 de la Ley 1676 de 2013 y establece que el acreedor podrá satisfacer su crédito directamente con los bienes dados en garantía por el valor del avalúo, cuando así se haya pactado por mutuo acuerdo o cuando el acreedor garantizado sea tenedor del bien dado en garantía.

La ejecución especial por su parte contempla un procedimiento de enajenación de la Garantía Mobiliaria que procede en ciertos casos específicos que están descritos en el artículo 62 de la Ley 1676 de 2013³ y puede ser adelantado ante los notarios, y las Cámaras de Comercio.

Por otro lado, se encuentra la ejecución judicial que se tramitará por el proceso de adjudicación o realización especial de la garantía real regulado en el artículo 467 y 468 del Código General del Proceso. Así mismo, podrá acudirse a mecanismos alternativos de solución de conflictos en los casos donde se deban resolver las oposiciones del deudor o las controversias posteriores o también para resolver sobre la prelación de las garantías, pero los otros acreedores no son parte (Holland & Knight, 2014).

³ **ARTÍCULO 62. PROCEDENCIA.** La ejecución especial de las garantías mobiliarias procederá en cualquiera de los siguientes casos:

1. Por mutuo acuerdo entre el acreedor y el garante contenido en el contrato de garantía, en sus modificaciones o en acuerdos posteriores. Dicho acuerdo podrá incluir un mecanismo especial para llevar a cabo la enajenación o apropiación por el acreedor del bien sobre el cual recae la garantía, para lo cual se deberá cumplir con las disposiciones relativas a los contratos de adhesión y cláusulas abusivas contenidas en el Estatuto del Consumidor.
2. Cuando el acreedor garantizado sea tenedor del bien dado en garantía.
3. Cuando el acreedor tenga derecho legal de retención del bien.
4. Cuando el bien tenga un valor inferior a los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales.
5. Cuando se cumpla un plazo o una condición resolutoria de una obligación, siempre que expresamente se haya previsto la posibilidad de la ejecución especial.
6. Cuando el bien sea perecedero.

3. Pago directo en la ejecución de garantías mobiliarias entre Colombia y Costa Rica.

La ejecución de garantías mobiliarias hace referencia al hecho de hacer efectivas las garantías, para este proceso juega especial importancia el acuerdo de voluntades entre las partes para determinar el proceso de ejecución que se adelantará de acuerdo al caso concreto.

Chauca (2014) describe la importancia de los procesos de ejecución de Garantías mobiliarias afirmando que cuando los sistemas de ejecución son incapaces de satisfacer el crédito, no representan un verdadero sistema de garantías, ya que el mismo no es eficaz y no permite al acreedor ejercer su derecho de manera efectiva.

Hecha la anterior reflexión, a continuación, se desarrollará de manera específica la forma de ejecución de garantías mobiliarias en la legislación de Colombia y de Costa Rica, con el fin de identificar similitudes y diferencias en este proceso.

La Ley 1676 de 2013 tuvo la intención de permitir la ejecución de garantías mobiliarias de diversas maneras, de forma que el acreedor no se viera obligado a acudir a instancias jurisdiccionales para hacer efectiva la garantía. Así entonces se buscó facilitar estos procesos, con el fin de generar mayor seguridad para los acreedores y ampliar las líneas de crédito.

Como es bien sabido, antes de la entrada en vigencia de la Ley, para hacer efectiva una garantía prendaria era necesario iniciar un proceso ejecutivo en contra del garante, ante la jurisdicción ordinaria, con el fin de que el juez competente expidiera primero el mandamiento de pago y luego, la orden de remate que permitiera la venta del bien en pública subasta, para que el acreedor garantizado se pagara con el producto de dicha venta (Cuberos, 2014, p.63).

Como se describe anteriormente antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias, no se contaba con procesos eficaces para que el acreedor hiciera efectivas las Garantías cuando se presentaba el incumplimiento del deudor, por lo que se restringía el acceso a créditos en un alto porcentaje.

Como lo indica Bonilla (2014) el pago directo como una figura excepcional que deroga la prohibición del pacto comisorio de la prenda tanto del Código Civil como del Código de Comercio, sin dejar de lado que dicho pacto entre las partes debe sujetarse a las normas sobre cláusulas abusivas y contratos de adhesión. La prohibición del pacto comisorio buscaba proteger al deudor de abusos de parte de su acreedor, sin embargo, la excepción prevista en el caso del pago directo para Garantías Mobiliarias flexibiliza esta posición y crea una más favorable para el acreedor (p.25).

Como el presente artículo se centrará en el análisis del mecanismo de pago directo de manera específica, se explicará esta modalidad a profundidad, sin entrar en detalle sobre los otros mecanismos que si bien revisten alta importancia no son el objeto de estudio en este caso puntual.

El pago directo como mecanismo de ejecución de garantías mobiliarias se encuentra desarrollado en el artículo 60 de la Ley 1676 de 2013⁴, esta figura permite al acreedor de la garantía mobiliaria constituida, satisfacer su crédito directamente con el bien dado en garantía cuando precisa su tenencia o cuando se haya pactado con el deudor este método de manera expresa. Así entonces la modalidad de pago directo supone de la eliminación de la prohibición del pacto comisorio, de manera que el deudor podrá exigir el pago de la obligación por medio de la garantía, así la obligación sea por un valor menor al del bien dado en garantía (Herrera, 2014).

De acuerdo a lo expuesto anteriormente debe aclararse que la figura del pago directo en la ejecución de garantías mobiliarias puede presentarse de dos maneras diferentes, teniendo en cuenta si el bien dado en garantía se encuentra en tenencia del acreedor o si por el contrario está en custodia del deudor.

Como lo indica Rojas (2015), en el caso de que haya mutuo acuerdo entre las partes, el deudor conserve la tenencia y no concurren más acreedores sobre la garantía, en la ejecución por pago directo solo podrán intervenir el acreedor de la garantía y el deudor. *Contrario sensu* cuando se presenten situaciones de concurrencia de acreedores garantizados o el acreedor ostenta la tenencia del bien se deberá acudir a un juez o un perito según sea el caso.

La ejecución de la Garantía Mobiliaria por pago directo supone un avance respecto de los procedimientos regulares para que el acreedor haga efectiva una garantía, ya que, cuando hay una prenda con tenencia, no se requiere acudir a un tercero para que autorice la ejecución de

⁴ **Artículo 60. Pago directo.** El acreedor podrá satisfacer su crédito directamente con los bienes dados en garantía por el valor del avalúo que se realizará de conformidad con lo previsto en el parágrafo 3º del presente artículo, cuando así se haya pactado por mutuo acuerdo o cuando el acreedor garantizado sea tenedor del bien dado en garantía.

la garantía y procederá el pago directo como se indica en el artículo 60 de la Ley 1676 de 2013.

3.1 Mecanismo de pago directo.

El mecanismo para realizar la ejecución de Garantías Mobiliarias por pago directo está descrito en el Artículo 60 de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 1835 de 2015 que modifica y adiciona algunas normas de la Ley de garantías Mobiliarias, que precisa la ejecución por pago directo en sus artículos 2.2.2.4.2.3⁵, (Mecanismo de ejecución por pago directo), y 2.2.2.4.2.70⁶, (Diligencia de aprehensión y entrega).

⁵ **Artículo 2.2.2.4.2.3. Mecanismo de ejecución por pago directo.** Cuando el acreedor garantizado, en el evento del incumplimiento de la obligación garantizada ejerza el mecanismo de ejecución por pago directo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 1676 de 2013, deberá:

1. Inscribir el formulario de ejecución en el Registro de Garantías Mobiliarias en los términos del artículo 2.2.2.4.1.30, cuando la garantía se hubiera hecho oponible a través del Registro de Garantías Mobiliarias. Avisar a través del medio pactado para el efecto o mediante correo electrónico, al deudor y al garante acerca de la ejecución, sin perjuicio de lo dispuesto en la sección anterior.

El aviso y la inscripción del formulario registral de ejecución tendrán los efectos de notificación previstos en el numeral 1 del artículo 65 de la Ley 1676 de 2013.

El acreedor garantizado consultará el Registro de Garantías Mobiliarias a efecto de verificar la existencia de otros acreedores garantizados inscritos sobre el mismo bien y su prelación y, en desarrollo del procedimiento establecido en el numeral 2 del artículo 65 de la Ley 1676 de 2013, les remitirá, dentro de los cinco (5) días siguientes a la inscripción del formulario registral de ejecución, una copia de dicho formulario para que comparezcan y se manifiesten acerca del monto de la obligación a su favor.

2. En caso de que el acreedor garantizado no ostente la tenencia del bien en garantía, procederá a aprehenderlo de conformidad con lo pactado. Cuando no se hubiere pactado o no sea posible dar cumplimiento al procedimiento de aprehensión del bien en garantía, el acreedor garantizado podrá solicitar la entrega voluntaria del bien por parte del garante, mediante comunicación dirigida a la dirección electrónica según conste en el Registro de Garantías Mobiliarias. Si pasados cinco (5) días contados a partir de la solicitud el garante no hace entrega voluntaria del bien al acreedor garantizado, este último podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional competente la aprehensión y entrega del bien sin que medie proceso o trámite diferente al dispuesto en esta sección frente a aprehensión y entrega.

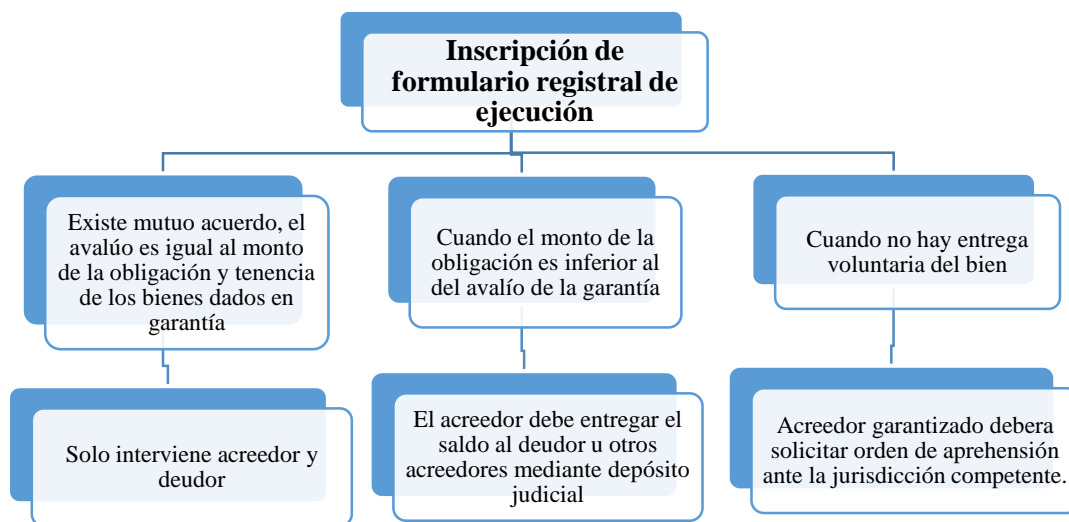
⁶ **Artículo 2.2.2.4.2.70. Diligencia de aprehensión y entrega.** El acreedor garantizado podrá solicitar la práctica de la diligencia de aprehensión y entrega de los bienes en garantía en los siguientes eventos:

1. Cuando iniciada la ejecución individual o en el marco de un proceso de insolvencia, y habiéndose dado la autorización del juez del concurso, el garante sea renuente a la entrega voluntaria del bien en garantía al acreedor garantizado que así lo solicite, en ejercicio del derecho previsto en el artículo 75 de la Ley 1676 de 2013, a efecto de ejercer su derecho de control y tenencia.

El acreedor garantizado deberá presentar una solicitud ante la autoridad jurisdiccional competente de que trata el artículo 57 de la Ley 1676 de 2013, acreditando el inicio de la ejecución, en donde manifieste la renuencia del garante a la entrega del bien en garantía, la cual deberá ocurrir dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud o en el término pactado en el contrato de garantía (...).

La siguiente gráfica permite identificar de manera concreta los escenarios de la ejecución por pago directo de acuerdo a condiciones específicas de la relación entre el acreedor prendario y el deudor.

Figura 1. Mecanismo de ejecución del pago directo de Garantías Mobiliarias.



Fuente: Rojas (2015).

El acuerdo entre las partes para la ejecución por pago directo de la Garantía en principio excluye la posibilidad de hacer uso de los demás procedimientos previstos como la ejecución judicial y la ejecución especial de la garantía, solo en condiciones especiales concurrirán con las otras formas de ejecución, como se observa a continuación.

El acreedor en ciertos casos puede ejercer los mecanismos de ejecución judicial, de pago directo nuevamente y de ejecución especial de la garantía, siempre y cuando estos dos últimos procedimientos hayan sido pactados entre las partes por acuerdo posterior al momento en que se defina el avalúo del bien y éste sea inferior al valor de la obligación, ya que en este caso es necesario que un perito determine el avalúo de la garantía en virtud de los derechos que le asisten al deudor (Superintendencia de Sociedades de Colombia, Concepto 0196110, 2016).

Lo anterior fundamenta la derogación a la prohibición del pacto comisorio teniendo en cuenta que el acreedor garantizado deberá ostentar un título que fundamente la transmisión del dominio a su favor; esto como un ejercicio de la libertad contractual de las partes que en el momento de constituir la garantía acuerden la modalidad de pago directo, o en los casos en que la Ley 1676 de 2013 en los casos de garantía con tenencia del acreedor.

En cuanto al modo, lo configurará la tradición, la cual será condicional cuando el acreedor cuente con la tenencia de la cosa o, en caso contrario, se verificará ante el incumplimiento del deudor, debiéndose establecer en cualquiera de esos eventos, el precio del bien por el que se saldará la obligación, y si se trata de aquellos sujetos a registro, la correspondiente inscripción del título traslativo del dominio en la oficina respectiva con lo que se perfeccionará esa tradición (León, 2016, p.35).

En el caso de que la tenencia de la garantía la conserve el deudor, el acreedor deberá proceder a realizar la solicitud de aprehensión material y entrega del bien, que se solicitará a la autoridad jurisdiccional competente para conocer de la solicitud de aprehensión de la garantía, que por mandato expreso del legislador, es el Juez Civil y la Superintendencia de Sociedades, esta última lo hará a prevención y solo en el evento en que el garante sea una sociedad sometida a su vigilancia (Superintendencia de Sociedades, 2016).

De igual manera el Artículo 2.2.2.4.2.70⁷ del Decreto 1835 de 2015 establece los casos en los que el acreedor garantizado podrá solicitar práctica de la diligencia de aprehensión y de los bienes en garantía, en el caso del pago directo se contempla que en los términos del parágrafo 2 del artículo 60 de la Ley 1676 de 2013 cuando el acreedor hubiere iniciado el mecanismo de ejecución por pago directo y el garante no hubiera accedido a la entrega del bien en garantía en el término de 5 días.

⁷ **Artículo 2.2.2.4.2.70. Diligencia de aprehensión y entrega.** El acreedor garantizado podrá solicitar la práctica de la diligencia de aprehensión y entrega de los bienes en garantía en los siguientes eventos:

1. Cuando iniciada la ejecución individual o en el marco de un proceso de insolvencia, y habiéndose dado la autorización del juez del concurso, el garante sea renuente a la entrega voluntaria del bien en garantía al acreedor garantizado que así lo solicite, en ejercicio del derecho previsto en el artículo 75 de la Ley 1676 de 2013, a efecto de ejercer su derecho de control y tenencia.

El acreedor garantizado deberá presentar una solicitud ante la autoridad jurisdiccional competente de que trata el artículo 57 de la Ley 1676 de 2013, acreditando el inicio de la ejecución, en donde manifieste la renuencia del garante a la entrega del bien en garantía, la cual deberá ocurrir dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud o en el término pactado en el contrato de garantía (...).

En estos casos el acreedor deberá presentar la solicitud de aprehensión del bien ante la autoridad jurisdiccional y para esto deberá anexar el contrato⁸ como lo dispone el inciso 3 del artículo 2.2.2.4.2.70 del Decreto 1835 de 2015, esto con el fin de que el juez ordene la aprehensión y entrega del bien al acreedor.

Respecto de lo anterior, cabe resaltar que los contratos de constitución de garantías mobiliarias son solemnes, ya que deben constar por escrito, sin embargo, sus elementos varían de acuerdo a las condiciones específicas que se pacten entre las partes (Echavarría, 2014).

Ahora bien, surge ante lo expuesto anteriormente un cuestionamiento frente a si ¿hay garantía real sobre bienes inmateriales?, al respecto puede decirse que en el caso que la función de la Garantía Real en la Ley 1676 de 2013 es garantizar efectivamente a un acreedor el cumplimiento de las obligaciones suscritas por el deudor.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013 se establece que todo bien o derecho susceptible de integrar el patrimonio de una empresa o establecimiento mercantil, puede ser objeto de garantía real, tanto de una hipoteca mobiliaria como una prenda sin desplazamiento de la posesión. De manera que, los signos distintivos sobre marcas comerciales, los modelos de utilidad y los diseños patentados⁹, y en estos casos la falta de inscripción de la garantía en el Registro priva al acreedor de los derechos de hacer exigibles los mismos, sin embargo es

⁸ **Artículo 2.2.2.4.2.70. Diligencia de aprehensión y entrega.** El acreedor garantizado podrá solicitar la práctica de la diligencia de aprehensión y entrega de los bienes en garantía en los siguientes eventos:

(...) 3. Cuando en los términos del parágrafo 2 del artículo 60 de la Ley 1676 de 2013, el acreedor garantizado hubiera iniciado el mecanismo de ejecución por pago directo, y el garante no hubiera accedido a la entrega del bien en garantía en el término establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.2.4.2.3. (...).

El acreedor garantizado deberá presentar la solicitud ante la autoridad jurisdiccional competente anexando el contrato de garantía.

Recibida la solicitud por parte de la autoridad jurisdiccional competente, esta ordenará la aprehensión y entrega del bien en garantía al acreedor o a un tercero a solicitud del acreedor garantizado o al tercero adquirente del bien según corresponda, anexando el contrato de garantía o el requerimiento para la entrega del bien.

La orden de aprehensión y entrega del bien en garantía se ejecutará por el funcionario comisionado o por la autoridad de policía, quienes no podrán admitir oposición.

⁹ Para Velásquez Jaramillo las cosas incorpóreas son las que no tienen un ser corpóreo y no admiten una percepción por los sentidos como los derechos reales y personales. En Velásquez Jaramillo, L.G. (1998). "Bienes" Editorial Temis, Santafé de Bogotá, séptima edición. P. 216.

necesario dejar claridad en cuanto la constitución de garantías sobre cosas incorpóreas como las descritas anteriormente ya que pueden considerarse como derecho patrimoniales.

El pago directo como método de ejecución de garantías mobiliarias constituye una forma efectiva de pago cuando el acreedor precisa la tenencia del bien objeto de la garantía mobiliaria, ya que como se observó en el desarrollo del artículo en el caso de que la tenencia la conserve el deudor deberá seguirse un proceso para solicitar el bien. Es por estas circunstancias precisamente que esta modalidad de ejecución debe surgir de la voluntad expresa de las partes y consagrarse así en el contrato de garantía mobiliaria.

4. Pago directo en la ejecución de garantías mobiliarias en Costa Rica.

Costa Rica ha creado un sistema de garantías mobiliarias basado en la Ley modelo expedida por la Organización de Estados Americanos (OEA), la misma se desarrolló con el fin de incentivar la competitividad en el país mediante el acceso a líneas de crédito destinado a las pequeñas y medianas empresas.

Lo anterior se materializó en la Ley 9246 de 2014 que define la Garantía Mobiliaria en su artículo 2, como un derecho real preferente conferido al acreedor garantizado sobre los bienes muebles dados en garantía. Dicha Garantía puede constituirse mediante contrato escrito entre el deudor garante y el acreedor garantizado, o por disposición de la ley, tales como los derechos de retención de bienes del deudor garante por parte de su transportista, almacenista, hotelero, mecánico y otras retenciones a los efectos de asegurar el pago de la obligación, al igual que por gravámenes judiciales y tributarios.

Con esta ley, se buscaba dar un marco legal que abre un abanico de oportunidades para que se acceda al crédito. Por lo tanto, es fundamental hacer la relación inmediata de que, al darse un crédito y una garantía como tal, tendrá cabida ante la no dación de pago de esta deuda, una ejecución de la garantía mobiliaria. De darse este caso, las reglas a seguir, a razón de esta normativa, cambian significativamente, de manera más marcada en la ejecución extrajudicial (Castillo, 2016, p.32).

La finalidad de la expedición de esta ley en Costa Rica encuentra similitudes con las expresadas en Colombia, ya que busca fomentar el acceso al crédito por parte de pequeñas y

medianas empresas que no poseen una amplia vida crediticia, pero poseen una serie de bienes muebles para respaldar la obligación.

El diseño del sistema de garantías mobiliarias en Costa Rica se compone de garantías de primera generación en las que los bienes muebles se desplazan al acreedor o a un tercero, de segunda generación cuando los bienes dados en garantía no se desplazan (permanecen en posesión del constituyente), y si lo hacen arrastran sobre sí el gravamen, y de tercera generación donde lo que se desplaza es el gravamen, que gravita como un satélite sobre el patrimonio del deudor, pasando de un bien a otro, hasta el momento de la cristalización (Torrealba, 2015).

La ley de Garantías Mobiliarias en Costa Rica a normativa crea un único régimen para la constitución, publicidad, prelación y ejecución de garantías mobiliarias, para su construcción se tuvo en cuenta la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos.

En cuanto a la ejecución de Garantías Mobiliarias en el sistema jurídico costarricense, la Ley prevé que se pueden otorgar garantías sobre bienes muebles tangibles e intangibles; como acciones de sociedades, inventarios de las empresas, titularización de los flujos de caja, contratos, marcas, software y derechos de la propiedad intelectual, cosechas, ganado, inventarios, maquinaria y equipo, contratos o sus derechos asociados, derechos de llave, derechos de cobro sobre cuentas por cobrar, facturas por cobrar, reembolsos de tarjetas de crédito (Punto Jurídico, 2017).

La ejecución de garantías mobiliarias en el sistema de garantías en Costa Rica tiene dos modalidades, una de ejecución judicial mediante el acceso a la jurisdicción y otra extrajudicial, que comprende un proceso más ágil y con menos tramites. La modalidad que se utilice por el acreedor para la ejecución estará pactada desde la constitución de la garantía Mobiliarias por las partes.

A continuación, voy a describir la parte inicial del procedimiento de ejecución de garantías, donde se plasman una serie de requisitos que deben cumplirse por parte del acreedor garantizado, independientemente de que se haya pactado la modalidad de ejecución judicial o extrajudicial:

La fase inicial de la ejecución de garantías mobiliarias en Costa Rica se podrá iniciar por parte del acreedor por incumplimiento del deudor, este debe efectuar la inscripción de un formulario de ejecución en el Sistema de Garantías Mobiliarias, dicho formulario deberá contener la Indicación de inscripción del formulario inicial de garantía, la Identificación del deudor garante, Identificación del acreedor garantizado y descripción del incumplimiento por parte del deudor garante de los bienes dados en garantía. Es potestad del acreedor enviar una copia informativa del formulario de ejecución al deudor garante, al deudor principal de la obligación garantizada cuando éste sea persona distinta del deudor garante (Ley 9246 de 2014).

Los procesos de ejecución descritos en la normativa que desarrolla los temas de Garantías Mobiliarias se caracterizan por ser breves y ágiles, buscando fomentar la aplicación de esta figura en el sistema bancario y financiero. Dichos procesos tienen como objetivo hacer valer un derecho previamente establecido por medio del poder coercitivo del Estado mediante procesos que prevén reglas especiales (Rodríguez, 2015).

Ahora bien, en el caso de la ejecución judicial teniendo en cuenta que la Ley 9246 de 2014 no determinó el juzgado competente para realizar dichos procesos; la Corte Suprema de Justicia acordó que los acreedores deben ejercer sus derechos de garantías mobiliarias en los Juzgados de Cobro Judicial.

En materia de ejecución extrajudicial la Ley 9246 en su artículo 57 dispuso que para que proceda la misma, ésta debe haber sido pactada por las partes en el momento de celebrar el contrato de garantía. Esta modalidad de ejecución será efectuada por medio de un notario público, corredor jurado o por medio de un fiduciario.

La ejecución extrajudicial opera cuando al celebrar el contrato de garantía las partes acordaron que en caso de incumplimiento de la obligación por parte del deudor garante, la venta y subasta de los bienes dados en garantía sea efectuada extrajudicialmente por medio de un notario público, corredor jurado o por medio de un fiduciario, sin necesidad de procedimientos judiciales, esto ordena que el acreedor garantizado que pretenda dar comienzo a una ejecución por incumplimiento del deudor efectúe la inscripción de un formulario de ejecución en el Sistema de Garantías Mobiliarias (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2015).

El análisis académico que se ha desarrollado en torno al procedimiento sobre ejecución extrajudicial de Garantías Mobiliarias ha emitido varias críticas, al considerar que deja el

deudor en una posición desigual, al no identificarse en la redacción de la Ley un mecanismo de oposición a la ejecución presentada por el acreedor garantizado ante notario. Al respecto Castillo (2017), expresa que en realidad la Ley 9246 de 2014 dio pie a la posibilidad de convenir un pacto comisorio expreso, aun cuando a lo largo de las legislaciones emitidas sobre la materia se considera un abuso del derecho. Sumado a lo anterior la ejecución extrajudicial no puede detenerse, aun cuando se presente reclamo ante el Poder Judicial, esto representa un riesgo a un debido proceso.

Sin embargo, cabe destacar que la expedición de esta Ley ha traído importantes beneficios para las pequeñas y medianas empresas en Costa Rica, ya que se han ampliado las opciones de bienes que se pueden otorgar en garantía para el acceso a financiación por parte de entidades bancarias.

De igual manera cabe resaltar que el Sistema de Garantías Mobiliarias de Costa Rica no contempla un mecanismo de ejecución por pago directo, solo se ha consagrado en la legislación el mecanismo de ejecución extrajudicial.

Conclusiones:

Los sistemas de garantías representan una innovación en las líneas de crédito tradicionales, ya que han convertido una serie de bienes muebles en el mecanismo idóneo para garantizar sus obligaciones financieras, permitiendo así acceder a créditos de forma más rápida y eficaz.

El desarrollo del presente artículo de investigación hace evidente que los países en busca de fomentar el acceso a sistemas de crédito para pequeñas y medianas empresas han decidido implementar sistemas modernos de garantías mobiliarias basándose en gran medida en lo propuesto por la Organización de Estados Americanos en su Ley Modelo Sobre Garantías Mobiliarias.

Colombia desarrolló en la Ley 1676 de 2013 el sistema de garantías mobiliarias de manera general, posteriormente se emite el Decreto 1835 de 2015 que reglamenta de una manera más específica las disposiciones de la ley mencionada. Costa Rica por su parte diseñó su sistema de garantías mobiliarias con la expedición de la Ley 9246 de 2014.

Si bien los Sistemas de Garantías Mobiliarias hacen referencia al mismo tema en general, que es la posibilidad de los pequeños y medianos empresarios de acceder a líneas de crédito garantizando sus obligaciones con bienes presentes o futuros, que con anterioridad a la expedición de las leyes que desarrollan las Garantías Mobiliarias no eran considerados por los bancos.

En esa medida se logra observar que Colombia y Costa Rica cuentan con un desarrollo importante en esta materia, si se tiene en cuenta el sistema de Garantías Mobiliarias en ambos países ya se puso en marcha y está siendo utilizado en la actualidad. Sin embargo, cabe anotar que existen ciertas diferencias en el desarrollo legislativo de estos países, como las figuras de ejecución que contempla cada uno, ya que Colombia consagra la ejecución por pago directo, por ejecución especial o ejecución judicial; mientras que Costa Rica únicamente propuso como opciones para la ejecución de las Garantías los métodos judicial y extrajudicial.

El pago directo es un método de ejecución de garantías mobiliarias constituyendo una forma efectiva de pago siempre y cuando el acreedor precisa la tenencia del bien objeto de la

garantía mobiliaria, de no ser así deberá realizar el proceso correspondiente para solicitar el bien.

El acreedor puede ejercer los mecanismos de ejecución judicial, de pago directo y de ejecución especial de la garantía, siempre y cuando hayan sido pactados entre las partes por acuerdo posterior al momento en que se defina el avalúo del bien y éste sea inferior al valor de la obligación, esto con el objetivo que ninguna de las partes se vea afectada en su patrimonio.

El tratamiento jurídico dado a los sistemas de Garantías Mobiliarias en los dos países es muy similar, esto teniendo en cuenta que los mismos se inspiraron en la Ley modelo desarrollada por la Organización de Estados Americanos, es así como en el análisis planteado en el artículo de investigación se encuentran varias similitudes entre la regulación los dos sistemas.

En Colombia desde la puesta en marcha del Registro de Garantías Mobiliarias decenas de empresas y personas naturales colombianas han adquirido las disposiciones de las leyes, lo que indica que muchas personas naturales y jurídicas han visto en la creación de este sistema una forma de incentivar el crecimiento de sus empresas. Costa Rica por su parte ha avanzado de manera significativa en la medida que esta ley representó un amplio cambio en el acceso a líneas de crédito por pequeñas y medianas empresas, sin embargo, cabe anotar que los sistemas de garantías mobiliarias llevan poco tiempo en funcionamiento por lo que su implementación se encuentra en pleno desarrollo.

La figura del pago directo en Colombia en el caso del incumplimiento del deudor, el acreedor puede solicitar la realización de la Garantía, permite indicar que el mismo resulta eficiente cuando es el acreedor quien conserva la tenencia de la garantía y ésta es del mismo valor o menor de la obligación garantizada, en los otros escenarios resultará dispendioso surtir los trámites requeridos para que la ejecución por pago directo se ajuste a lo dispuesto en La Ley.

Costa Rica consagró un método de ejecución extrajudicial que se basa en la voluntad de las partes el cual facultó a los Notarios a fin de que procedieran con la ejecución del proceso extrajudicialmente. Esto en diversos casos ha sido cuestionado en este país por indicar que los notarios fueron encargados de un poder que no les corresponde y que debería ser ejercido por un juez; así desconociendo, la actividad notarial como una expresión de la descentralización por colaboración, ha dicho la Corte que “ésta se presenta en los casos en

que el Estado decide acudir al apoyo de los particulares para el desempeño de algunas de sus funciones, cuando su manejo exige el concurso de personas con una formación especializada, de quienes no siempre dispone la administración, o cuando los costos y el esfuerzo organizativo que requiere el montaje de una estructura técnica adecuada para llevar a cabo la prestación del servicio especial, resulta fiscalmente onerosa y menos eficiente, que la opción de utilizar el apoyo del sector privado. Mediante esta forma de descentralización el Estado soluciona la atención de una necesidad pública, por fuera del esquema tradicional de atribuir a un organismo público el manejo de la función que exige el cumplimiento de un determinado cometido”. Por eso, bien se ha dicho, que “la descentralización por colaboración viene a ser una de las formas del ejercicio privado de las funciones públicas”.

La legislación de Costa Rica y Colombia frente al régimen de Garantías Mobiliarias encuentra varias similitudes importantes como la implementación de un registro global y la aceptación de bienes intangibles en los accesos a créditos bancarios.

Referencias:

- Akerlof, G. A. (1978). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. In *Uncertainty in Economics* (pp. 235-251). Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012214850750022X>
- Almuna Pérez, T., & Vercellino Jélvez, F. (2009). *Ley Modelo Sobre Garantías Mobiliarias de la OEA: Una propuesta para facilitar el acceso al crédito a la pequeña y mediana empresa y la armonización jurídica en América*. Santiago: Universidad de Chile. Recuperado de http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2009/de-almuna_t/pdfAmont/de-almuna_t.pdf
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2015). *Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias comparada*. Santiago de Chile: Chile. Recuperado de [https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id.../5/Garantias%20Mobiliarias%20\(preeval\)](https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id.../5/Garantias%20Mobiliarias%20(preeval)).
- Bonilla, F. (2014). El Equilibrio Contractual En La Relación De Las Garantías Mobiliarias: A Propósito De La Ley 1676 De 2013. *E-Mercatoria*, 1(2). Recuperado de <http://www.emercatoria.edu.co/PAGINAS/VOLUMEN13/02.html#a170>
- Castillo, J. (2017). *El pacto comisorio en la ley de garantías mobiliarias y su contraposición a los artículos 28, 45 y 46 de la constitución política: un análisis de la constitucionalidad de la nueva legislación de garantías mobiliarias a la luz del derecho comparado latinoamericano (tesis de pregrado)*. Universidad de Costa Rica: San José: Costa Rica. Recuperado de <http://iiij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/09/Juan-Jose-Castillo-Solano-Tesis-Completa.pdf>
- Chauca, M. M. (2000). La ejecución de garantías mobiliarias y el pacto comisario. Comparación de los sistemas peruano y norteamericano. *IUS ET VERITAS*, 10(20), 338-346. Recuperado <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/15943/16368>
- Decreto 1835 de 2015. Colombia. <http://jacevedo.imprenta.gov.co/buscador-diario-oficial>

- Echavarría, A. (2014). Análisis de la Ley 1676 de 2013: Garantías Mobiliarias. Tesis de Pregrado. Universidad Eafit. Medellín: Colombia. Recuperado de <https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/5253/ANALISIS%20DE%20LA%20LEY%201676%20DE%202013%20GARANTIAS%20MOBILIARIAS.pdf?sequence=2>
- Espinosa, S. (2015). Garantías mobiliarias en el régimen colombiano según ley 1676 del 20 de agosto de 2013. Tesis de Pregrado. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín: Colombia. Recuperado de <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2715/Sim%C3%B3n%20Espinosa%20monograf%C3%ADa%20aprobada%204.12.15.pdf?sequence=1>
- Feliú Rey, J. (2016). El Derecho de garantías mobiliarias en contexto una aproximación global. La Ley Mercantil, 29(1). Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5721329>
- Gabrielli, E., & de Cores Helguera, C. (2008). El nuevo derecho de las garantías reales: estudio comparado de las recientes tendencias en materia de garantías reales mobiliarias. Editorial Reus. Recuperado de <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=mManBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=garantias+mobiliarias+de+Cores&ots=37F3vOEQyJ&sig=CKJR1C9s336hgRUgXfFqTsIVIj8#v=onepage&q=garantias%20mobiliarias%20de%20Cores&f=false>
- Herrera, D. (2014). Análisis de las implicaciones del pago directo y de la ejecución directa contemplados en la Ley 1676 de 2013 sobre garantías mobiliarias (Tesis de Pregrado). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá: Colombia. Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/14891/HerreraRodriguezDanielMauricio2014.pdf?sequence=1>
- Holland & Knight. (2014). Ejecución de Garantías Mobiliarias (Ley 1676 de 2013). Presentación, Bogota: Colombia. Recuperado de site2015.afic.com.co/wp-content/uploads/2015/02/EGM.pptx
- León, C. (2016). El pago directo por parte del acreedor garantizado: fundamentos de la transmisión de la propiedad. Revista De Derecho Privado, 56(1). Recuperado de

https://derechoprivado.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechoprivado/pri613.pdf

Ley 1676 de 2013 <http://jacevedo.imprenta.gov.co/buscador-diario-oficial>.

Ley 9246 de 2015. Costa Rica.
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/05/20/ALCA17_20_05_2014.pdf

Olmos, J. (2014). Algunas Observaciones Generales sobre las Garantías Mobiliarias en el Derecho Europeo por Medio de Tres Ejemplos Concretos. Revista E-Mercatoría 13, 3-28. Recuperado de http://heinonline.org.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/HOL/Page?handle=hein.journals/revermerc13&div=8&start_page=3&collection=journals&set_as_cursor=1&men_tab=srchresults

Ramos Galindo; F. (2017). Ejecución de garantías mobiliarias en Colombia según la Ley 1676 de 2013. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/15103>

Requejo, S. M. (2001). Estructura de capital de la empresa española ante problemas de riesgo moral y selección adversa. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, (10), 485-50. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=195493>

Rodríguez, J. (2015). El desarrollo incorrecto de las cláusulas de ejecución voluntaria dentro de los contratos de garantías mobiliarias (Tesis de Pregrado). UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR: Guatemala. Recuperado de <http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/07/01/Rodriguez-Juan.pdf>

Rojas, L. (2015). Aplicación y Beneficios de la Ley 1676 de 2013 Referente a Garantías Mobiliarias, como Instrumento de Acceso al Crédito. (Tesis de Pregrado). Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá: Colombia. Recuperado <http://unimilitar-dspace.metabiblioteca.org/bitstream/10654/6689/1/Monografia%2bLina%2bMar%C3%ADA%2bRojas.pdf>

- Superintendencia de Industria y Comercio, (2011). Estudio económico “las garantías mobiliarias en la promoción de la competencia y el acceso al crédito en Colombia”. Bogotá. Recuperado de <http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Informe%20Acceso%20Credito.pdf>
- Superintendencia de Sociedades, S. (2016). Concepto 0196110 del 14 de octubre de 2016: Garantía. Recuperado de http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/18447/SuperSociedades-Concepto-2016-N0196110_20161014%20garant%C3%ADa.pdf?sequence=1
- Tamayo, A. (2004). Las principales Garantías del Crédito. Bogotá: Edición Doctrina y Ley Ltda.
- Torrealba, F. (2015). La ley de garantías mobiliarias: primeras visiones. Revista Judicial, 116(1). Recuperado de https://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos/documentos/revs_juds/Revista%20116/PDFs/02-garantias_mobiliarias.pdf
- Veiga, A. (2017). GARANTÍAS MOBILIARIAS Ley 1676 de 2013 (1st ed.). Bogotá: Editorial Universidad Sergio Arboleda.